

CAPÍTULO 9

Irak

Una decisión estratégica

El jueves 20 de marzo de 2003, las fuerzas militares de Estados Unidos y del Reino Unido dieron inicio a la Operación Libertad Duradera contra el régimen dictatorial de Sadam Hussein. La decisión de intervenir en Irak se enmarca en el contexto internacional y estratégico provocado por el 11-S. Sin embargo, también fue el desenlace de un proceso más largo: fue el resultado de la evolución a peor de la situación en Irak tras la primera guerra del Golfo. El régimen de Sadam Hussein había incumplido sistemáticamente las obligaciones internacionales impuestas después de su derrota para garantizar que Irak no volviera a representar una amenaza para la paz y la seguridad de la zona y del mundo.

Tras la invasión de Kuwait y la derrota de Hussein por las fuerzas de la coalición internacional, Estados Unidos había adoptado la decisión estratégica de no tomar Bagdad ni forzar la caída del régimen. Se había pensado que el derrocamiento de Sadam acarrearía males mayores. El dictador logró salir relativamente bien parado de la guerra: había perdido, pero conservaba el poder y todos sus resortes. Desde Occidente se confió en que la oposición interna —kurdos en el norte, chiíes en el sur— acabaría provocando la caída de Hussein. Se alen-

tó a la disidencia interna; se alimentaron sus expectativas y esperanzas. Pero, a la hora de la verdad, no se la respaldó. Sadam Hussein pudo comprobar así la fortaleza de su posición. La comprobó y la demostró mediante una represión brutal de la población kurda y chif.

A partir de ese momento, desde el punto de vista de la comunidad internacional, la única opción razonable era intentar contener al régimen iraquí mediante obligaciones, prohibiciones y sanciones. Se establecieron zonas de exclusión en el espacio aéreo en el norte y el sur, y se impuso un programa de inspección y destrucción de armas químicas, biológicas y nucleares. Se sabía que Sadam tenía armas químicas porque no había dudado en utilizarlas. Tanto contra los iraníes en la guerra que enfrentó a ambos países en los ochenta, como más tarde contra los kurdos. También se sabía que pretendía convertir a Irak en una potencia nuclear. Tanto es así que, para intentar frenar el programa que estaba en marcha, los israelíes se habían visto impelidos a destruir el reactor de Osirak en 1981.

Cuando Bill Clinton asumió la presidencia de Estados Unidos, fue especialmente explícito respecto a la amenaza que suponía Sadam Hussein para la paz y la seguridad. Poco tiempo después pudo comprobarlo. La noticia de que los servicios de inteligencia iraquíes pretendían aprovechar la presencia del expresidente Bush a los actos que conmemoraban la liberación de Kuwait para asesinarle obligó a Clinton a actuar. Clinton denunció con claridad la existencia de un arsenal químico y biológico en Irak, el continuo incumplimiento de las obligaciones de desarme por parte de Sadam Hussein y su empeño en desarrollar capacidad nuclear. En su primera intervención ante los jefes de Estado Mayor y el Pentágono después de ser reelegido presidente, Clinton incluso llegó a sugerir la posibilidad de una intervención militar. Literalmente, senten-

ció: «La fuerza no puede ser la primera respuesta, pero a veces es la única respuesta».

Cinco años antes del 11-S, por tanto, Sadam Hussein ya era una preocupación estratégica de primer orden para Estados Unidos. Una preocupación en torno a la cual se fue construyendo un consenso político muy amplio entre demócratas y republicanos. Ese acuerdo se materializó en la Iraq Liberation Act, una ley aprobada por el Congreso en diciembre de 1998 y firmada por Bill Clinton que establece como política oficial de Estados Unidos la de «apoyar los esfuerzos para derrocar al régimen encabezado por Sadam Hussein y promover el surgimiento de un Gobierno democrático que lo sustituya». La ley comprometía la ayuda norteamericana a los grupos de oposición, incluido equipamiento militar, y preveía un tribunal de crímenes de guerra para enjuiciar a los dirigentes del régimen. No contemplaba la intervención militar directa, pero definía un acuerdo político muy amplio y sólido que cuatro años después sería la base para autorizar al presidente de Estados Unidos a utilizar la fuerza contra Sadam Hussein. La evolución de Sadam es la que va dando cuerpo a la doctrina, y el consenso cada vez es más amplio en las instituciones y entre la población estadounidense. Un consenso que se construye entre los dos partidos, que en buena medida es Clinton quien lo encabeza y que se prolonga con George W. Bush.

Aquel verano de 1998, Clinton me llamó para explicarme que la situación con Sadam era especialmente grave y que era necesario actuar. Me preguntó por nuestra posición en el caso de que se produjera una acción militar y, a la vista de la información que me dio, le contesté que le apoyaríamos. El año anterior, en la visita oficial que realicé a Washington, Clinton me había planteado formalmente la petición de apoyo a España para la intervención sobre objetivos del régimen iraquí. No me pidió compromisos militares, pero sí la disposición a pres-

tar apoyo logístico, si fuera necesario, a las operaciones que se estaban planeando.

Le manifesté nuestra solidaridad porque me parecía que era la posición coherente ante la evolución de la situación en Irak y la existencia de un marco de obligaciones que se estaban incumpliendo de manera grave y reiterada. Muchos interpretaron que el endurecimiento de la posición de Clinton frente a Sadam y la expectativa del empleo de la fuerza formaban parte de una maniobra del presidente para desviar la atención del caso Lewinsky, que le había colocado en una situación política y personal muy delicada. No digo que algunos no vieran en aquello una útil coincidencia, pero era sólo eso y no una situación que Clinton hubiera forzado por razones de política interna.

El 17 de diciembre tuvo lugar un contundente ataque sobre objetivos iraquíes de interés militar. En su comparecencia para dar cuenta del ataque, Clinton no dejó lugar a dudas sobre su análisis de lo que estaba ocurriendo en Irak y de lo que había que hacer: «Si Sadam desafía al mundo y no somos capaces de responder, nos enfrentaremos a una amenaza mucho mayor en el futuro». Terminó con una afirmación inequívoca de lo que ocurriría si no se actuaba: «Sadam volverá a atacar a sus vecinos. Declarará la guerra contra su propio pueblo. Y, quédense con mis palabras, Sadam desarrollará armas de destrucción masiva. Las desplegará y las usará».

La trayectoria de Sadam Hussein era una historia terrorífica. La represión contra los kurdos y chiíes de Irak respondía a un impulso verdaderamente genocida. El mundo lo había podido comprobar cuando se conoció que, en marzo de 1988, Sadam había utilizado armas químicas contra la población de Halabja, una localidad de población kurda fronteriza con Irán. Previamente, los bombardeos del ejército iraquí habían acorralado a los habitantes del pueblo para concentrarlos y así fa-

cilitar la diseminación de gases tóxicos. Murieron más de cinco mil hombres, mujeres y niños.

De la crueldad de Sadam Hussein sabían también sus adversarios y aquellos que perdían su favor. No sólo aspiraba a mantener y aumentar su arsenal destructivo, sino que seguía beneficiándose de las penalidades de su pueblo con la administración corrupta del Programa Petróleo por Alimentos que la ONU había autorizado para atenuar el efecto de las sanciones económicas que se habían impuesto al régimen. El régimen iraquí estaba especialmente activo en su intento de que se levantaran las sanciones. A mí me lo pidió personalmente el ministro de asuntos Exteriores Tariq Aziz cuando nos reunimos en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sadam era un factor de inestabilidad y un peligro para sus vecinos. Había mantenido una guerra de ocho años con Irán a un coste humano y económico devastador, había invadido Kuwait para anexionarlo como una nueva provincia de Irak, y había atacado a Israel y a Arabia Saudí.

Desde la comunidad internacional, se habían hecho y seguían haciéndose los mayores esfuerzos diplomáticos para desactivar la amenaza de Sadam y obligarle a cumplir las exigencias impuestas por la ONU. Después del alto el fuego de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había obligado a Irak a declarar todos sus arsenales y abrirlos a la inspección en el plazo de treinta días. Ocho años después, Sadam hacía imposible la labor de los inspectores, se negaba a facilitar información veraz o significativa sobre su capacidad armamentística y, según todos los informes de la misión de inspección de la ONU, ONUSCOM, retenía una considerable capacidad en medios químicos y bacteriológicos.

Cuando a finales de 2002 se aceleraron los acontecimientos que desembocarían en la intervención militar de norte-

americanos y británicos, el ya expresidente Clinton vino de visita a Madrid. Almorzamos juntos en la Moncloa. Recuerdo muy bien lo que me dijo: «La verdad es que no sabemos lo que pasa en Irak desde hace cinco años». Es decir, desde que Sadam Hussein había expulsado a los inspectores de la ONU. El reconocimiento era impresionante. Equivalía a admitir que el dictador de Irak y uno de los adversarios o enemigos más relevantes de Estados Unidos estaba literalmente fuera del control de la comunidad internacional.

El marco legal y el entorno internacional

A finales de 2002 se negoció la que luego sería la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el cese de las hostilidades de la guerra del Golfo once años antes, en 1991, ese mismo Consejo de Seguridad ya había aprobado otras dieciséis resoluciones. Todas imponían obligaciones claras y terminantes que se habían incumplido abiertamente: desde la obligación de declarar arsenales hasta la de facilitar el trabajo de los inspectores, pasando por la de destruir capacidad militar prohibida.

Durante esos años, Irak había sido objeto de acciones militares de contención y de castigo por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Dos tercios de su espacio aéreo estaban bajo control de estos dos países, que en distintos momentos decidieron la adopción de medidas de fuerza, en algunos casos muy intensas.

El incumplimiento sistemático de las resoluciones de la ONU por parte de Sadam parecía conducir inevitablemente hacia nuevas acciones militares para las que no se había exigido una legitimación internacional añadida al marco jurídico que ya existía. Sin embargo, a pesar de la evidencia de que su

predecesor Bill Clinton había utilizado la fuerza militar cuando lo consideró necesario sin nuevas autorizaciones de las Naciones Unidas, George W. Bush no quiso hacerlo y decidió acudir al Consejo de Seguridad. Tomó esta decisión contra la opinión de algunos destacados miembros de su Gabinete que, no sin argumentos, alegaban el precedente de Clinton.

Echando la vista atrás, sin duda resulta bastante paradójico que el Bush al que ya entonces se le acusaba de «unilateralismo» decidiese trabajar dentro de las Naciones Unidas, mientras que Bill Clinton, oficialmente multilateralista, lo había considerado un trámite prescindible porque estaba convencido de contar con suficiente amparo legal, como parecían confirmar el silencio o la aprobación de la mayoría de los más destacados miembros de la comunidad internacional.

Bush lo estableció así en septiembre de 2002, cuando intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La víspera de su intervención me llamó para adelantarme lo que iba a decir. Quería trabajar con las Naciones Unidas a partir de la constatación evidente del incumplimiento por parte de Sadam de las resoluciones que le afectaban. Hablé también con Blair de esta estrategia de implicación de las Naciones Unidas que, coincidíamos, era la correcta.

Liderada por Bush, la diplomacia estadounidense se puso a trabajar en las Naciones Unidas hasta alcanzar un consenso en torno al texto que se votaría como Resolución 1441 del Consejo de Seguridad aprobada el 8 de noviembre de 2002. En virtud de dicha resolución Irak debía presentar en el plazo de treinta días una «declaración cabal, exacta y completa de todos los aspectos de sus programas para el desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares, misiles balísticos y otros sistemas vectores». Cuatro meses después, en vez de hacer esa declaración, Irak pedía aclaraciones al consejo sobre su resolución y seguía obstaculizando arbitrariamente la labor de los

técnicos de la OIEA y de UNMOVIC, la nueva misión de inspección de la ONU.

Pronto se desencadenó una ruidosa controversia jurídica sobre el alcance de la resolución y en qué medida ésta habilitaba para utilizar la fuerza contra el régimen de Sadam Hussein. Los argumentos a favor de esta interpretación —que yo compartía— tenían peso. Irak estaba técnicamente en guerra, la situación era de «alto el fuego» tras el cese de hostilidades de la guerra de 1991. En su resolución, el consejo actuaba en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU que trata de las medias coactivas. La resolución recordaba que el consejo había autorizado a los Estados miembros a adoptar las «medidas necesarias» para forzar a Irak a cumplir las obligaciones de desarme impuestas en 1990 y todas las resoluciones posteriores, y advertía a aquel país de las «graves consecuencias» que se derivarían de un nuevo incumplimiento. El estado de guerra se había mantenido con diversas acciones militares de Estados Unidos y el Reino Unido, lo que venía a avalar la interpretación de que, en todo caso, la Resolución 1441 reforzaba una habilitación de la que esas dos potencias hacían uso en su responsabilidad de contención del régimen de Sadam.

La oposición a esta interpretación no ofrecía una explicación de por qué, con mayor cobertura de la ONU, era inaceptable lo que se venía aceptando hasta entonces como una actuación legítima contra Sadam. Tampoco oí nunca a nadie ofrecer una explicación solvente de por qué era legítima la intervención en los Balcanes, sobre la que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no había producido resolución alguna, pero no lo era la posible intervención militar en Irak. Lo que algunos querían justificar como una intervención por razones humanitarias en el caso de los Balcanes sólo revelaba su doble moral y su insensibilidad ante un régimen que, entre otras brutalidades indescriptibles, había utilizado armas químicas

contra su propia población civil e incurría en un permanente desprecio de sus obligaciones internacionales. Episodios posteriores, como la actuación occidental en Libia, en la que a mi juicio se fue más allá del marco legal establecido por el Consejo de Seguridad, ponen en evidencia el arbitrario rasero por el que se midió la actuación en Irak desde el punto de vista de la legalidad internacional y su interpretación y aplicación en la práctica.

En este clima, se planteó la conveniencia de buscar una nueva resolución del Consejo de Seguridad que actuara, si llegaba el caso, como desencadenante de la acción militar. El primer ministro británico Tony Blair y yo mismo aconsejamos esa iniciativa, no porque la considerásemos jurídicamente necesaria, sino porque parecía políticamente conveniente si con ello se ayudaba a ensanchar y fortalecer el consenso desde el que afrontar la crisis. Bush, de nuevo, aceptó volver al Consejo de Seguridad, en la confianza, compartida con Blair, de que, entre otros, México y Chile le apoyarían y de que Francia no utilizaría su veto. Se trataba de contar con una mayoría clara en el consejo, aun previendo el veto de Rusia y tal vez de Francia. París en ningún caso parecía dispuesto a apoyar la intervención, pero intentaría evitar el coste político de un veto a Estados Unidos en el consejo.

En realidad, que hubiera o no una nueva resolución parecía traer sin cuidado a los demás; a quienes importaba era a nosotros. Habían adoptado una postura de oposición a Estados Unidos y habían elegido este asunto, de una enorme gravedad, para poner en práctica algunas teorías sobre Europa como contrapoder de Estados Unidos o para buscar un factor de movilización política y callejera que reviviera la suerte política de una izquierda que se sentía perdedora histórica frente a los norteamericanos.

En España, el entonces líder de los socialistas, José Luis

Rodríguez Zapatero, lo dejó muy claro cuando llegó a reconocer que no apoyaría la intervención aunque hubiera una nueva resolución de las Naciones Unidas. Las pretendidas insuficiencias jurídicas de nuestra posición eran en realidad una excusa para el combate político y la búsqueda de rédito electoral.

Chirac, Schroeder y Putin

La discrepancia en Europa respecto a Irak no estribaba en el grado de peligrosidad o de amenaza que representaba Sadam Hussein para la seguridad y la paz mundiales. En contra de lo que tanto se ha dicho y repetido, tampoco se centraba en la existencia de armas de destrucción masiva. Lo primero no lo dudaba nadie, y lo segundo, casi nadie, en tanto en cuanto el propio Sadam Hussein había contribuido a hacernos creer que las tenía y en gran cantidad.

El verdadero motivo de la discrepancia europea eran las pretensiones de Francia y Alemania. Ambos países llegaron a la conclusión de que era el momento de romper amarras con Estados Unidos e inaugurar una nueva concepción de la defensa de los países europeos, más alejada del atlántico y todo lo que ello significa. Una concepción —y esto es clave— en la que España y otros países europeos no tendríamos mucho que decir y en la que nuestros intereses quedarían supeditados a los de los grandes, al autoproclamado núcleo de la «Europa europea». Ésa, y no otra, es la verdadera razón de la discrepancia europea sobre Irak.

Las motivaciones francesas quedaron muy claras cuando Chirac mandó callar a los países europeos que no estaban de acuerdo con la posición de Francia. En particular a Polonia, Hungría y la República Checa, a los que les advirtió que los europeos «de siempre» ya habían hecho bastante con aceptar-

los en la Unión y que ahora lo que debían hacer era acatar lo que dijeran los franceses y los alemanes. En este grupo de países considerados «de segunda» se incluía también a otros, como Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca y, por supuesto, España. Era una concepción muy poco integradora de Europa y la Unión Europea.

Chirac aprovechó la oportunidad de la crisis de Irak para asociar a Schroeder a una estrategia que se presentaba como pacifista. Y Schroeder se sumó, a pesar de lo que había dicho y prometido. Antes de las elecciones alemanas, en septiembre de 2002, el canciller alemán se había reunido con Bush y le había asegurado su apoyo a una eventual intervención en Irak. Lo curioso es que ese ofrecimiento se lo hizo a Bush sin que éste se lo pidiera. Bush le creyó, quizás por ese punto de ingenuidad que tenía en relación con Europa. Luego se sintió engañado y nunca lo olvidó.

En todo caso, la voz cantante la llevó Francia. Probablemente porque Alemania le había entregado el testigo a cambio de que Francia suscribiese la preeminencia de Alemania en la cuestión de la paridad dentro de la Unión Europea.

Fue entonces cuando Putin vio una oportunidad con la que nunca había soñado y se apresuró a aprovecharla. Lo que no había sido capaz de conseguir la antigua Unión Soviética —romper la solidaridad atlántica— se lo encontraba servido en bandeja, gracias a un enfrentamiento en el que la ira francesa recaía precisamente sobre los países que se habían liberado del dominio soviético.

Putin es un hombre pragmático que está convencido de que Rusia necesita una fuerte autoridad central. Se veía con la responsabilidad de recomponer internamente Rusia después del colapso de la URSS, restablecer la relación con las antiguas repúblicas soviéticas y contener la expansión de la OTAN para consolidar su primacía en ese espacio.

En abril de 2003, Putin, Schroeder y Chirac se fotografiaron juntos en una cumbre en San Petersburgo que llamaron los Diálogos de San Petersburgo, no sé si en referencia a la obra de De Maistre, que tan útil les debió de resultar. La imagen del canciller alemán unido al presidente ruso ante la presencia de Chirac en un asunto clave sobre el debate de seguridad europeo tuvo los efectos que se podían esperar en aquellos países que, muy conscientes de un pasado todavía próximo, habían buscado en la OTAN la protección del marco occidental de defensa antes incluso de aspirar al ingreso en la Unión Europea.

La cuestión era qué íbamos a hacer los demás. Y los demás —no todos, pero sí muchos— decidimos que no íbamos a aceptar que nadie se arrogara el derecho a decidir la posición del resto de los países y, mucho menos, si esa posición no era conveniente a nuestros intereses.

La posición de España ante la cuestión de Irak era una continuación lógica —no digo que necesaria— del papel que nos habíamos ganado en la Unión, un papel que todavía no había calado en todas partes. En España seguía muy extendida la idea de que cualquier cosa que viniera de «Europa», como suele decirse, era de por sí positiva y buena para España. Esto era probablemente la consecuencia de la Transición y del importante papel desempeñado por Europa en nuestra apertura a la democracia y nuestra posterior consolidación económica. Eso hacía prácticamente imposible oponerse o plantear una posición propia. Y, ni mucho menos, alternativa.

Yo no estaba dispuesto a aceptar esa dinámica. Lo importante para mí era preservar y hacer respetar los intereses de España. Por eso, cuando Francia y Alemania decidieron hacer pública una declaración sobre la cuestión de Irak sin contar con el criterio o la opinión del resto de los países de la Unión, mi respuesta fue decir «no». No, ningún país europeo, por

fuerte o poderoso que sea, puede arrogarse el derecho a hablar en nombre de los demás. En esa posición yo no estaba solo, ni muchísimo menos.

Un grupo de países que no aceptábamos las pretensiones hegemónicas de Francia y Alemania, y que no queríamos que se produjera una grave quiebra en la relación atlántica, nos planteamos la posibilidad de hacer una declaración política pública para explicar nuestra posición. A sugerencia y petición del periódico *The Wall Street Journal*, aquella declaración se convirtió finalmente en un artículo titulado «United We Stand». Yo fui el ponente del texto, que circuló entre los Gobiernos europeos, y que inicialmente suscribimos ocho primeros ministros o presidentes: los de Italia, el Reino Unido, Dinamarca, Hungría, Polonia, Chequia, Portugal y España. Una vez publicado, fuimos recibiendo nuevas adhesiones. Al final, de los veinticinco Estados que entonces formaban la Unión Europea, dieciocho apoyaron el texto.

Como era de prever, nuestra iniciativa agudizaría las discrepancias internas en la medida en que Chirac pretendía lisa y llanamente que los nuevos Estados candidatos de la Europa central y del Este simplemente se callaran. Recuerdo bien la comida que mantuvimos con los candidatos en Bruselas el 21 de marzo, durante el Consejo Europeo de primavera. No se los había invitado al consejo por presiones de Francia. Las caras de Chirac y Schroeder lo decían todo.

En lo que afecta a España, tuve la oportunidad de decidir si nuestro país continuaba con una política de complacencia ante el núcleo de lo que se autodenominaba la «Europa europea» o si, por el contrario, dejaba de jugar a ese juego y enfocaba la política exterior tal y como yo creía que era más conveniente a sus intereses. Tuve la oportunidad y tomé una decisión. Eso supuso someter al país a un proceso de cambio y aceleración muy profundo. Lo habíamos hecho con el euro

y ahora tocaba hacerlo en relación con la posición de España en Europa y en el mundo. No iba a ser fácil.

Entre México y Crawford

A finales de febrero de 2003, George W. Bush y su mujer, Laura, nos invitaron a Ana y a mí a Crawford, una pequeña localidad de Texas donde los Bush tienen un magnífico rancho. Era una prueba de confianza y amistad, y así lo valoramos.

Puesto que México era miembro del Consejo de Seguridad, me pareció lógico, antes de ir a Crawford, hablar con Vicente Fox, el presidente amigo de un país amigo. El encuentro no salió como esperaba.

Antes de aterrizar en Ciudad de México, ya habíamos recibido algunas señales de lo que podía ocurrir. Habíamos quedado en que el encuentro sería de carácter formal y que luego habría una comparecencia conjunta ante los medios. De pronto se nos anunció que había habido un cambio de planes: la reunión sería informal y no habría rueda de prensa. Cuando por fin llegué a México, lo que me encontré tampoco puede calificarse como una reunión informal: Fox hizo su aparición como si acabara de bajarse de un caballo...

Cenamos en la residencia presidencial de Los Pinos acompañados por el canciller mexicano. La conversación fue cordial, pero Fox, que estaba incómodo con la situación, dejó claro que no asumía ningún compromiso de apoyo a una nueva resolución de las Naciones Unidas. Después de la cena, comparecí ante la prensa en el hotel Four Seasons. El ambiente no podía ser más tenso, con una visible hostilidad por parte de los medios locales, que se referían a mi visita como un acto de presión e injerencia sobre el Gobierno mexicano.

La posición de Fox no hizo más que acentuarse con la

crisis. Lo que empezó con reticencias acabó en una incomunicación total. Bush intentaba hablar con él y Fox ni siquiera le devolvía la llamada, aunque fuera para explicarle su posición.

Desde México, volamos a Houston, donde visitamos en su casa a Bush padre y a su esposa Barbara. La recuerdo como una visita muy agradable, en la que los Bush derrocharon cordialidad con nosotros y con toda la delegación. Tuve una conversación muy interesante con Bush, en la que hablamos a fondo de Oriente Medio y coincidimos en que la gestión de la crisis de Irak no debía perder de vista el conflicto entre Israel y los palestinos. Bush quería que Estados Unidos hiciera un esfuerzo visible por solucionar el conflicto, precisamente en aquellos momentos. Valoraba la sensibilidad de España ante este problema y esperaba que la confianza que yo tenía con su hijo sirviera para que abordáramos esta cuestión durante el fin de semana que íbamos a pasar juntos en Crawford. Así lo hicimos, y cabe recordar que George W. Bush fue el primer presidente de Estados Unidos que ha propuesto en el Congreso de su país una solución basada en un Estado palestino independiente que viva en paz con Israel.

Llegamos a Crawford en coche desde el aeropuerto de Waco. Nos acompañaban Javier Rupérez, nuestro embajador en Washington, Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia, Alfredo Timermans, secretario de Estado de Comunicación, y Alberto Carnero, director del Departamento de Internacional de la Presidencia.

Javier Rupérez tuvo un papel muy relevante en el extraordinario fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos. Un gran profesional, un sólido político y un servidor público leal, Javier Rupérez ejercía como un atlantista sincero e inteligente. Su gestión en Washington puso de manifiesto unas dotes personales y profesionales que le situaban a la cabeza de la diplomacia española.

La estancia en Crawford con el matrimonio Bush fue muy agradable. Hablamos largamente y nos reunimos a solas la tarde de nuestra llegada y en la mañana del día siguiente. Ese día, a primera hora, compartí el *briefing* que el presidente de Estados Unidos recibe diariamente de un funcionario de alto nivel de la CIA que le informa de las novedades en la situación política y de seguridad del mundo. A la reunión se incorporó después Condoleezza Rice, que entonces ejercía como una muy eficaz asesora de Seguridad Nacional del presidente. Recorrimos el rancho y conocimos al círculo de amigos personales de los Bush, con quienes cenamos la tarde de nuestra llegada.

El objetivo en aquellos momentos era recabar apoyos para la nueva resolución que se quería acordar en el seno del Consejo de Seguridad. Años después, un periódico reprodujo la minuta de una de mis conversaciones con Bush que había redactado el embajador Rupérez para enviar al Ministerio de Asuntos Exteriores, como era su obligación. Me gustó mucho ver ahí reflejado el contenido exacto de mis posiciones.

Bush estaba dispuesto a trabajar por una segunda resolución que facilitara la situación a aquellos países cuyas opiniones públicas se mostraban muy contrarias a una intervención en Irak. Entre ellos, España. Le encontré optimista respecto a esa posibilidad, completamente decidido a que Sadam Hussein se plegara a las condiciones acordadas por las Naciones Unidas. No habría más plazos ni condiciones. Se trataba de que el Consejo de Seguridad constatará que el régimen iraquí insistía en quebrantar sus obligaciones y recordara que eso facultaba a la comunidad internacional a adoptar todas las medidas que fueran necesarias para obligarle a cumplir. Bush me dijo que no esperaría más allá de mediados de marzo y que confiaba en conseguir el apoyo de países como México o Chile. A mí, su pronóstico me parecía demasiado optimista y así se lo dije.

En las Azores

La reunión en las Azores fue el último episodio antes de la intervención de las tropas de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak. Los tiempos se habían agotado y los esfuerzos por recabar el apoyo de otros países con una segunda resolución del Consejo de Seguridad no habían dado fruto. Francia había anunciado ya su veto. Había llegado el momento de tomar una decisión.

A iniciativa de Bush se planteó la posibilidad de celebrar una reunión. Aunque muchos otros países europeos habían prestado su apoyo a la intervención, a España se la convoca por su doble condición de aliado y miembro del Consejo de Seguridad. Como ya he contado en alguna otra ocasión, la idea inicial de Bush era que la cumbre se celebrara en las islas Bermudas. Pero yo me negué, por las connotaciones que pudiera tener, y propuse las Azores. Me pareció una alternativa razonable: las Azores se encuentran a mitad de camino entre Europa y Estados Unidos, y Estados Unidos tiene en ellas una base militar, lo que facilitaba la organización.

Hablé con el primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, y le informé de los objetivos de la reunión: por un lado, que fuera visible la concertación política en la que tanto habíamos trabajado desde el comienzo de la crisis, y, por otro, hacer un último intento de que Sadam Hussein abandonara el poder. Porque, a esas alturas, de eso se trataba: la condición necesaria para restablecer las condiciones de seguridad que la comunidad internacional llevaba exigiendo sin respuesta durante más de una década era la renuncia o el derrocamiento de Hussein.

Barroso aceptó sin reservas actuar como organizador y anfitrión de la reunión. Ello le acarreó fuertes críticas, a las

que contestó con inteligencia y acierto. Declaró sentirse muy satisfecho de estar acompañado por el presidente de la más importante democracia del mundo, el primer ministro del aliado histórico de Portugal y el presidente del Gobierno de su país vecino y principal socio.

Antes de reunirnos, intercambiamos algunas ideas y también avanzamos el sentido general de las declaraciones que íbamos a hacer al término del encuentro, en las que cada uno pondría el acento, como es lógico, donde creyese más necesario y oportuno.

La reunión transcurrió como habíamos previsto. Analizamos los términos en los que había que formular el emplazamiento a Hussein para que abandonara el poder y, en previsión de que una intervención militar parecía inevitable, abordamos también el necesario esfuerzo de reconstrucción de Irak y sus instituciones. También hablamos del papel que habría de desempeñar la ONU en el Irak post-Sadam.

La posición de Tony Blair era especialmente delicada en términos políticos: su partido, el laborista, estaba dividido a cuenta de Irak, y su posición dependía en esos momentos del apoyo de los conservadores. Los dos éramos conscientes del precio político y personal que estábamos pagando por apoyar una intervención en Irak. Pero los dos coincidíamos en que mucho más grave que nuestro coste personal era el coste para Europa y para nuestros dos países de una ruptura de la relación atlántica.

Tras el encuentro y la rueda de prensa, cenamos en las instalaciones de la base. Tony Blair no pudo quedarse porque al día siguiente tenía que comparecer en la Cámara de los Comunes. Recuerdo que Bush estuvo especialmente conversador y contó muchas anécdotas y episodios de su «primera vida», antes de seguir el camino de su padre e implicarse en la política.

En la cena le entregué un mensaje de parte del presidente libio, Muamar el Gadafi. Comentamos en términos positivos la decisión del régimen libio de destruir su arsenal de armas químicas y bacteriológicas. A diferencia de Sadam, Gadafi parecía haberse tomado en serio los cambios provocados por el 11-S: había entendido que con la seguridad internacional ya no se podía jugar y había decidido desarmarse y despejar dudas sobre su capacidad armamentística no convencional. Era el revés del espejo de Sadam, que seguía una política de provocaciones, convencido probablemente de que Estados Unidos no se atrevería a intervenir. La pregunta circulaba por muchos ambientes: si Sadam Hussein no tiene armas de destrucción masiva, ¿por qué impide a los inspectores que lo certifiquen y se evita así una intervención militar o, aún peor, su propia caída? La pregunta, aun siendo muy lógica, nunca obtuvo respuesta, pero hoy todo indica que Sadam había unido su suerte a que los demás creyeran que tenía esas armas porque pensaba que de ese modo se aseguraba de que nunca se produciría una intervención contra él. Se equivocó, porque fue precisamente eso lo que hizo necesaria la intervención. Y es importante afirmar que Sadam pudo evitar la actuación militar en Irak. No sólo no lo hizo, sino que creó todas las condiciones para que la intervención se produjera.

En lo que me afectaba a mí personalmente, tenía perfecta conciencia del coste que estaba asumiendo como presidente del Gobierno de España y líder del Partido Popular. Un coste político y también personal. Sin embargo, estaba convencido de que apoyar a Estados Unidos en esta difícil encrucijada convenía a España. Nos convenía porque el enemigo contra el que luchábamos era el mismo, el que más daño nos había hecho y seguía haciendo a los españoles: el terrorismo. Y porque nos permitía participar e influir en las grandes decisiones estratégicas que se toman en el mundo.

No ignoraba el vértigo que podía sentir una parte importante de los españoles. Y sabía muy bien que mi decisión sería utilizada torticeramente por la izquierda. Primero, para contraponer de forma ridícula y falaz a los partidarios de la guerra con los partidarios de la paz. Como si cualquiera en su sano juicio pudiera ser favorable a la guerra o contrario a la paz. Y, segundo, para potenciar su ya de por sí implacable campaña política contra el Partido Popular. A esa campaña se sumó un factor de animadversión personal contra mí. Algunos sectores de la izquierda no me habían perdonado la victoria del 1996 y, menos aún, la del año 2000. No aceptaban que pudiera haber alcanzado un cierto grado de influencia para España en el mundo. Y, menos aún, que lo hubiera conseguido sin un compromiso militar propiamente dicho. Es decir, sin poner soldados sobre el terreno.

El propio Felipe González lo formuló con aplastante sinceridad. Contrapuso la posición de Blair, que consideraba «respetable» porque había comprometido tropas británicas, con la mía, que no lo era porque yo no había comprometido tropas españolas. El razonamiento era curioso. Y no sólo porque entraba en colisión frontal con una de las grandes mentiras repetidas hasta la saciedad por Zapatero y sus compañeros de que yo había mandado soldados a Irak. También porque reflejaba el sentir más íntimo de algunos personajes del socialismo español. Me lo explicó una vez un amigo del PSOE: «Felipe habría ido a las Azores aunque fuese remando». Y es que, para algunos, lo más irritante de la foto de las Azores no es que existiese, sino que los protagonistas no fueran ellos.

España no participó en las operaciones militares que desembocaron en la caída del régimen de Hussein, pero sí en los esfuerzos posteriores de estabilización del país. En el viaje que hice a Irak en diciembre de 2003, pude comprobar el extraordinario trabajo de nuestras unidades; su profesionalidad, en-

trega y la magnífica labor que hacían para ayudar a las comunidades locales. Dije entonces —y lo reitero ahora— que estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros soldados en Irak. Un trabajo que se realizó siempre bajo el amparo de las Naciones Unidas. Ningún soldado español estuvo ni un minuto en Irak sin la plena cobertura de las resoluciones de la ONU.

La Cumbre de las Azores marcó el punto más alto de la relevancia internacional de España y tuvo importantes consecuencias. Nuestra cooperación con Estados Unidos se afianzó aún más en áreas para nosotros muy importantes, singularmente en la lucha antiterrorista.

Analizado con la distancia que da el tiempo, me resulta todavía más insólito que esa posición de fortaleza e influencia internacional se perdiera. Mejor dicho, que el propio Gobierno de España abandonara esa posición de forma deliberada. No sólo por lo que supuso en cuanto a pérdida de ventajas y oportunidades, sino también por lo difícil que es recuperarla. Una posición como la que alcanzó España en aquellos años sólo se consigue en circunstancias históricas muy particulares. Por supuesto, esas circunstancias no necesariamente tienen que ser conflictivas ni mucho menos bélicas. Sin embargo, sí son especiales y desgraciadamente no está en nuestra mano decidir cuáles son. Son las que son, y lo que a nosotros nos corresponde decidir es si las aprovechamos o no.

Y luego está la forma en la que se renuncia a esa posición. Convertir una decisión legítima del Gobierno español, como lo fue la decisión de retirar las tropas de Irak, en una afrenta a Estados Unidos por efectismo o simple cálculo partidista me parece un error de proporciones históricas. Una torpeza que desvela muy poco juicio y una nula preocupación por los intereses políticos, económicos y estratégicos de España.

El debate en España

Las operaciones de las tropas estadounidenses y británicas en Irak empezaron la madrugada del jueves 20 de marzo con el ataque a objetivos militares entre los que se incluían las residencias de Sadam Hussein. Recibí la noticia con el apunte de que los norteamericanos habían bautizado sus acciones con el sugerente nombre de Operación Conmoción y Pavor. «¡Lo que nos faltaba! —pensé—. ¡¿Quién asesora al Pentágono a la hora de elegir estos nombres?!» La verdad es que luego lo cambiaron.

Bush me informaba a diario de la evolución de las operaciones. En esos días cruciales, también se intensificaron las conversaciones que mantenía rutinariamente con los principales dirigentes del mundo árabe. En especial, con el presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Abdalá de Jordania. Los dos insistían mucho en la importancia de que la operación militar fuera rápida y de que la presencia de las tropas se prolongara el menor tiempo posible. Con razón, pedían también un plan claro para la estabilización y recuperación del país.

Precisamente con ese objetivo se puso en marcha la iniciativa de una Conferencia Internacional para la reconstrucción de Irak bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Cinco días después del inicio de la intervención, el ministro de Defensa, Federico Trillo, recibió una llamada del Pentágono con el ofrecimiento de que fuera España la que organizara la conferencia. Así lo hicimos unas semanas después, en Madrid.

Para el seguimiento de la situación en Irak y el análisis de las decisiones que había que adoptar, activamos la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. La comisión se reunía en una sala del llamado «búnker» de la Moncloa. Como coordinador de nuestras actuaciones en el esfuer-

zo de recuperación de Irak designé a Fernando Díaz Moreno, entonces secretario de Estado de Defensa y hombre de gran competencia jurídica y gestora.

Si la evolución de la situación militar, política y social en Irak era crucial, la tensión creada internamente en España como consecuencia de la movilización de la izquierda contra el Gobierno empezaba a adquirir una dimensión cada vez más alarmante. El nivel de radicalismo y agresividad era proporcional a las mentiras lanzadas desde una izquierda política y mediática ayuna de argumentos y sedienta de poder. Se había conseguido difundir la idea de que España «había ido a una guerra ilegal», aunque ni una cosa ni la otra fueran verdad: ni los soldados españoles habían participado en ninguna operación militar, ni la intervención en Irak carecía de base o cobertura legal.

La crispación se disparó. Edificios oficiales y sedes del Partido Popular fueron atacados. Nuestros dirigentes y simpatizantes eran agredidos e insultados. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 era un factor añadido de movilización para unos y preocupación para otros.

Y en eso se produjeron dos acontecimientos trágicos. El 7 de abril de 2003, Julio Anguita Parrado, periodista de *El Mundo* e hijo del histórico dirigente de Izquierda Unida con quien yo había compartido tantas buenas conversaciones y momentos interesantes durante los años en la oposición, fue alcanzado por fuego iraquí cuando cubría las operaciones militares como corresponsal empotrado en una unidad del ejército norteamericano. Le escribí a su padre una carta de mi puño y letra, en la que le expresaba a él y a su familia mi profundo dolor y mis más sinceras condolencias. Julio Anguita nunca me contestó. Lo llamé por teléfono, pero tampoco me respondió. Lo sentí muchísimo. Sentí la muerte de su hijo y

sentí la quiebra de una relación que siempre había apreciado de forma especial.

No fueron tiempos fáciles. En España se creó un estado de opinión en el que el Gobierno aparecía como culpable directo de la muerte de un corresponsal de guerra en un escenario bélico. Y la situación fue a peor. Al día siguiente de la muerte de Julio Anguita, el 8 de abril, un cámara de Telecinco, José Couso, moría como consecuencia de los disparos de un tanque norteamericano sobre la planta 15 del hotel Palestina de Bagdad.

De poco o nada sirvió que Estados Unidos pidiera perdón por esa acción, que había sido fruto del trágico error de un militar norteamericano que confundió la cámara del periodista español con el arma de un francotirador iraquí. Una vez más, el Gobierno de España se convirtió en objetivo de las iras de sectores empeñados en imputarle las más graves responsabilidades.

La tensión política alcanzó niveles con pocos precedentes en la historia democrática. La crisis de Irak ya había suscitado intensos debates parlamentarios. En contra de otro de los mitos de aquellos años, el Gobierno hizo una intensísima labor de explicación y comunicación. Entre el 5 de febrero y el 18 de marzo, se celebraron cuatro debates parlamentarios sobre Irak en el Congreso de los Diputados. Todos fueron a petición del propio Gobierno. En todos comparecí yo mismo para explicar la posición de España y debatir con los distintos Grupos Parlamentarios la evolución de la crisis y las decisiones que íbamos adoptando.

Aquellos debates dejaron muy claro el sesgo ideológico y partidista con el que algunos grupos afrontaban la cuestión de Irak. Los socialistas vieron en la crisis de Irak una gran oportunidad política para asomar la cabeza, y no estaban dispuestos a desaprovecharla.

Nunca llegaron a esbozar un discurso coherente sobre la seguridad internacional. Se lanzaron gustosos a la vieja demagogia sentimental y pacifista; a una retórica hueca tejida sobre banalidades y falacias. Y, de ahí, a la negación total de cualquier compromiso con la realidad. Así, en un alarde de sinceridad que los historiadores han de agradecer, Zapatero llegó a reconocer que la cuestión no era tanto lo que dijeran las resoluciones del Consejo de Seguridad —ni la famosa Resolución 1441 ni ninguna otra que se pudiera aprobar en el futuro— como la oposición frontal del PSOE al Gobierno.

A partir de ese reconocimiento se sucedieron todo tipo de disparates. Desde la afirmación paladina de que el objetivo de la política exterior de España debía ser aislar a Estados Unidos, hasta la pretensión de convertirnos en principales avalistas del régimen de Sadam, negando la posibilidad de su sustitución. La radicalización de las posiciones socialistas era evidente. Nada de lo que decían reflejaba una sincera preocupación jurídica o una postura meditada en relación con las exigencias y límites de la seguridad internacional. Irak fue para el PSOE un arma contra el Gobierno del PP. Nada más. Y nada menos.

Las operaciones militares concluyeron con la toma de Bagdad en el tiempo previsto. Su final supuso un alivio. España se había comprometido a estar presente en la tarea de estabilización del país, y pronto las Naciones Unidas establecieron el marco jurídico para la realización de nuestros compromisos.

Como suele ocurrir, el éxito atrajo apoyos tardíos y también provocó alguna inquietud en quienes habían apostado por la confrontación dentro de la comunidad atlántica, lo que los había hecho renunciar a la posibilidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos. Algunos de estos últimos veían la posición de España no sin cierta envidia.

No habíamos comprometido a nuestras Fuerzas Armadas en la intervención, pero habíamos logrado alcanzar una gran relevancia e influencia internacional gracias a nuestra posición de sólido apoyo y solidaridad. Habíamos participado —y estábamos participando— en la construcción de una nueva arquitectura internacional. Una arquitectura internacional en la que España adquiriría un peso y una influencia que futuros Gobiernos podrían administrar en beneficio de nuestro país. Era una mirada nueva sobre el mundo y sobre el papel de España en ese mundo. Una mirada nueva que exigía tiempo y, sobre todo, continuidad para consolidarse.

Viajé a Washington para reunirme con el presidente Bush. Quería sellar una nueva etapa de cooperación en la lucha contra el terrorismo y ampliar nuestra relación bilateral a nuevos terrenos.

Aquel viaje puso de manifiesto el grado de sintonía y profundidad alcanzado por nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Ello a su vez fortaleció extraordinariamente la posición de España en Europa e Iberoamérica, y, aún más relevante, nuestra propia posición interna. Estados Unidos aceptó incluir a las marcas políticas de ETA y a varios de sus dirigentes en la lista de organizaciones terroristas. Fue un paso muy importante que facilitó enormemente la persecución de las actividades internacionales de ETA y coincidió con las primeras elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra sin una candidatura proetarra.

En ese viaje también pude comprobar que dentro de la propia Administración norteamericana existían opiniones encontradas respecto de cuáles debían ser los objetivos de Estados Unidos tras el derrocamiento de Sadam Hussein. Lo cierto fue que Washington tardó mucho tiempo —en mi opinión, demasiado— en aclarar el nivel de su compromiso militar con

el futuro de Irak, con su estabilización y con las políticas de recuperación e institucionalización del país.

En este punto, Donald Rumsfeld apareció injustamente como responsable. No lo conocí personalmente hasta la cena de despedida que Bush me ofreció en la Casa Blanca. Él, según dijo, tenía mucho interés en conocer al único dirigente político extranjero que le había mandado callar. Se refería a unas declaraciones mías en el *Wall Street Journal* en las que había aludido a la necesidad de rebajar el nivel de confusión en los medios y de mantener una actitud más calmada. Rumsfeld era un buen conocedor de Europa —había sido embajador ante la OTAN en Bruselas— y de España. Había estado en la delegación del presidente Ford cuando éste visitó nuestro país en 1975, y era un apasionado de los encierros de San Fermín, en los que había participado. Mantuve una buena relación con él después de dejar el Gobierno, y lo visité en su oficina. Rumsfeld suele trabajar de pie, porque padece un problema de espalda. Fue muy amable, me regaló una impresionante fotografía nocturna de las dos Coreas, tomada por un satélite, que conservo en mi despacho. Me pareció que se encontraba algo solo. En su país se le hizo responsable de demasiadas cosas, y en Europa algunos no le perdonaron que hablara de «la vieja Europa frente a la nueva Europa».

En España, la radicalización y desesperación de la izquierda anticipaban algunas actitudes y comportamientos que tiempo después marcarían el rumbo político de nuestro país.

El 16 de mayo, un grupo terrorista vinculado al radicalismo islamista cometía un brutal atentado en la Casa de España de Casablanca. Veintitrés personas morían asesinadas. Estábamos en plena campaña electoral. El candidato socialista creyó encontrar una nueva oportunidad para desgastar al Gobierno del PP y llegó a hacernos responsables de la masacre

por nuestra posición favorable a la intervención militar en Irak. Aquellas declaraciones superaban todas las reglas tácitas de la disputa partidista en una democracia moderna y civilizada. La izquierda iba a por todas, sin reparar en ningún límite político o moral.

Victoria en las urnas

La estrategia de acoso al Gobierno del PP encabezada por el PSOE —y apoyada por el resto de la izquierda y sectores del nacionalismo— tenía como primer gran objetivo ganar las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2003. Esas elecciones iban a ser el primer gran test del impacto de Irak en la política doméstica española. El resultado de esas elecciones nos iba a decir hasta qué punto era real y profunda la oposición de los españoles. Y hasta qué punto esa oposición se traduciría en una voluntad de cambio.

Yo era muy consciente de que no estábamos ante una campaña cualquiera. Sabía lo que estaba en juego. La izquierda quería convertir las elecciones autonómicas y municipales en un plebiscito contra el Gobierno de Aznar, en el punto de inflexión que quebrase la trayectoria ascendente del PP y pudiese fin a nuestro proyecto político de cambio para España. Si siempre he tenido un sentido acusado de mi propia responsabilidad, en esta ocasión lo tenía aún más. Hasta el punto de que llegué a plantearme una posibilidad que nunca antes había valorado: si las elecciones salían muy mal y la estabilidad del partido se veía seriamente comprometida, revisaría mi decisión de no repetir como candidato en las siguientes elecciones generales. Afortunadamente, no lo tuve que hacer.

Aquella campaña, sin lugar a dudas, fue la más intensa que he vivido y disputado nunca. Decidí implicarme a fondo,

a tope y sin reservas. Era fundamental estar con el partido, con sus dirigentes y sus militantes, con toda esa buena gente que lo había pasado mal, a quienes la izquierda había acosado, presionado y demonizado durante meses. El Partido Popular había respondido de forma admirable a las campañas de insultos y agresiones, y yo quería retribuirle con todo mi esfuerzo y todo mi empeño.

En el momento de elaboración de las listas, Antonio Basagoiti, que entonces se presentaba a la alcaldía de Bilbao, llamó a Javier Zarzalejos para preguntarle si yo aceptaría cerrar su candidatura. Javier me transmitió el deseo de Antonio y acepté sin dudar.

La campaña fue físicamente agotadora, con dos grandes mítines diarios y muchos kilómetros de viaje. Y, sin embargo, fue la más gratificante de toda mi vida política. Muchos de aquellos mítines, sin guiones previos ni intervenciones preparadas, se convertían en diálogos espontáneos con la gente. El contacto con la militancia y la cohesión del partido me reafirmaban en la impresión de que las elecciones no estaban perdidas ni muchísimo menos. El Gobierno había sufrido un evidente desgaste, pero no había perdido la iniciativa. Y, en cambio, la radicalización del PSOE amenazaba con desbordarse.

Pasé la jornada electoral en la Moncloa. No recibí apenas datos ni previsiones de resultados en todo el día. En mi entorno había incertidumbre y preocupación. Pero, al final, ocurrió lo que mi intuición y la experiencia de la campaña me habían dicho que sucedería: ganamos.

En la sede del partido en la calle Génova resumí los datos. Habíamos ganado en 35 de las 52 capitales de provincia. Habíamos ganado en 9 de las 13 comunidades que celebraban elecciones autonómicas. Teníamos más alcaldes y concejales que ningún otro partido. Y, sobre todo, habíamos demostra-

do que el Partido Popular —al que algunos creían, si no desahuciado, sí muy debilitado— seguía siendo el partido mejor valorado y más apoyado por los españoles. También di las gracias a todos mis colaboradores y al conjunto del partido por el impresionante esfuerzo realizado y por el ejemplo que cada uno de ellos había dado de civismo, fortaleza y entrega al gran proyecto del PP para España. Fue una noche de alegría y muchas emociones.

Aquella contienda electoral ofreció varias lecciones relevantes. Demostró que no hay mejor estrategia electoral que la defensa firme de las convicciones y del proyecto. Y demostró, también, que agitar las llamas del radicalismo es muy peligroso porque siempre beneficia a los más extremistas. A partir de esas elecciones, el PSOE de Zapatero se vería arrastrado por la izquierda más radical y por los nacionalistas hacia posiciones cada vez más escoradas y perjudiciales para España. En lo que a mí respecta, el camino parecía despejado para completar con cierta tranquilidad mi segunda y última legislatura como presidente del Gobierno de España. Esa tranquilidad, sin embargo, duraría muy poco.

No ignoraba el vértigo que podía sentir una parte importante de los españoles. Y sabía muy bien que mi decisión sería utilizada torticeramente por la izquierda. Primero, para contraponer de forma ridícula y falaz a los partidarios de la guerra con los partidarios de la paz. Como si cualquiera en su sano juicio pudiera ser favorable a la guerra o contrario a la paz. Y, segundo, para potenciar su ya de por sí implacable campaña política contra el Partido Popular. A esa campaña se sumó un factor de animadversión personal contra mí. Algunos sectores de la izquierda no me habían perdonado la victoria del 1996 y, menos aún, la del año 2000. No aceptaban que pudiera haber alcanzado un cierto grado de influencia para España en el mundo. Y, menos aún, que lo hubiera conseguido sin un compromiso militar propiamente dicho. Es decir, sin poner soldados sobre el terreno.

El propio Felipe González lo formuló con aplastante sinceridad. Contrapuso la posición de Blair, que consideraba «respetable» porque había comprometido tropas británicas, con la mía, que no lo era porque yo no había comprometido tropas españolas. El razonamiento era curioso. Y no sólo porque entraba en colisión frontal con una de las grandes mentiras repetidas hasta la saciedad por Zapatero y sus compañeros de que yo había mandado soldados a Irak. También porque reflejaba el sentir más íntimo de algunos personajes del socialismo español. Me lo explicó una vez un amigo del PSOE: «Felipe habría ido a las Azores aunque fuese remando». Y es que, para algunos, lo más irritante de la foto de las Azores no es que existiese, sino que los protagonistas no fueran ellos.

España no participó en las operaciones militares que desembocaron en la caída del régimen de Hussein, pero sí en los esfuerzos posteriores de estabilización del país. En el viaje que hice a Irak en diciembre de 2003, pude comprobar el extraordinario trabajo de nuestras unidades; su profesionalidad, en-

trega y la magnífica labor que hacían para ayudar a las comunidades locales. Dije entonces —y lo reitero ahora— que estoy muy orgulloso del trabajo de nuestros soldados en Irak. Un trabajo que se realizó siempre bajo el amparo de las Naciones Unidas. Ningún soldado español estuvo ni un minuto en Irak sin la plena cobertura de las resoluciones de la ONU.

La Cumbre de las Azores marcó el punto más alto de la relevancia internacional de España y tuvo importantes consecuencias. Nuestra cooperación con Estados Unidos se afianzó aún más en áreas para nosotros muy importantes, singularmente en la lucha antiterrorista.

Analizado con la distancia que da el tiempo, me resulta todavía más insólito que esa posición de fortaleza e influencia internacional se perdiera. Mejor dicho, que el propio Gobierno de España abandonara esa posición de forma deliberada. No sólo por lo que supuso en cuanto a pérdida de ventajas y oportunidades, sino también por lo difícil que es recuperarla. Una posición como la que alcanzó España en aquellos años sólo se consigue en circunstancias históricas muy particulares. Por supuesto, esas circunstancias no necesariamente tienen que ser conflictivas ni mucho menos bélicas. Sin embargo, sí son especiales y desgraciadamente no está en nuestra mano decidir cuáles son. Son las que son, y lo que a nosotros nos corresponde decidir es si las aprovechamos o no.

Y luego está la forma en la que se renuncia a esa posición. Convertir una decisión legítima del Gobierno español, como lo fue la decisión de retirar las tropas de Irak, en una afrenta a Estados Unidos por efectismo o simple cálculo partidista me parece un error de proporciones históricas. Una torpeza que desvela muy poco juicio y una nula preocupación por los intereses políticos, económicos y estratégicos de España.

El debate en España

Las operaciones de las tropas estadounidenses y británicas en Irak empezaron la madrugada del jueves 20 de marzo con el ataque a objetivos militares entre los que se incluían las residencias de Sadam Hussein. Recibí la noticia con el apunte de que los norteamericanos habían bautizado sus acciones con el sugerente nombre de Operación Conmoción y Pavor. «¡Lo que nos faltaba! —pensé—. ¡¿Quién asesora al Pentágono a la hora de elegir estos nombres?!» La verdad es que luego lo cambiaron.

Bush me informaba a diario de la evolución de las operaciones. En esos días cruciales, también se intensificaron las conversaciones que mantenía rutinariamente con los principales dirigentes del mundo árabe. En especial, con el presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Abdalá de Jordania. Los dos insistían mucho en la importancia de que la operación militar fuera rápida y de que la presencia de las tropas se prolongara el menor tiempo posible. Con razón, pedían también un plan claro para la estabilización y recuperación del país.

Precisamente con ese objetivo se puso en marcha la iniciativa de una Conferencia Internacional para la reconstrucción de Irak bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Cinco días después del inicio de la intervención, el ministro de Defensa, Federico Trillo, recibió una llamada del Pentágono con el ofrecimiento de que fuera España la que organizara la conferencia. Así lo hicimos unas semanas después, en Madrid.

Para el seguimiento de la situación en Irak y el análisis de las decisiones que había que adoptar, activamos la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. La comisión se reunía en una sala del llamado «búnker» de la Moncloa. Como coordinador de nuestras actuaciones en el esfuer-

zo de recuperación de Irak designé a Fernando Díaz Moreno, entonces secretario de Estado de Defensa y hombre de gran competencia jurídica y gestora.

Si la evolución de la situación militar, política y social en Irak era crucial, la tensión creada internamente en España como consecuencia de la movilización de la izquierda contra el Gobierno empezaba a adquirir una dimensión cada vez más alarmante. El nivel de radicalismo y agresividad era proporcional a las mentiras lanzadas desde una izquierda política y mediática ayuna de argumentos y sedienta de poder. Se había conseguido difundir la idea de que España «había ido a una guerra ilegal», aunque ni una cosa ni la otra fueran verdad: ni los soldados españoles habían participado en ninguna operación militar, ni la intervención en Irak carecía de base o cobertura legal.

La crispación se disparó. Edificios oficiales y sedes del Partido Popular fueron atacados. Nuestros dirigentes y simpatizantes eran agredidos e insultados. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 era un factor añadido de movilización para unos y preocupación para otros.

Y en eso se produjeron dos acontecimientos trágicos. El 7 de abril de 2003, Julio Anguita Parrado, periodista de *El Mundo* e hijo del histórico dirigente de Izquierda Unida con quien yo había compartido tantas buenas conversaciones y momentos interesantes durante los años en la oposición, fue alcanzado por fuego iraquí cuando cubría las operaciones militares como corresponsal empotrado en una unidad del ejército norteamericano. Le escribí a su padre una carta de mi puño y letra, en la que le expresaba a él y a su familia mi profundo dolor y mis más sinceras condolencias. Julio Anguita nunca me contestó. Lo llamé por teléfono, pero tampoco me respondió. Lo sentí muchísimo. Sentí la muerte de su hijo y

sentí la quiebra de una relación que siempre había apreciado de forma especial.

No fueron tiempos fáciles. En España se creó un estado de opinión en el que el Gobierno aparecía como culpable directo de la muerte de un corresponsal de guerra en un escenario bélico. Y la situación fue a peor. Al día siguiente de la muerte de Julio Anguita, el 8 de abril, un cámara de Telecinco, José Couso, moría como consecuencia de los disparos de un tanque norteamericano sobre la planta 15 del hotel Palestina de Bagdad.

De poco o nada sirvió que Estados Unidos pidiera perdón por esa acción, que había sido fruto del trágico error de un militar norteamericano que confundió la cámara del periodista español con el arma de un francotirador iraquí. Una vez más, el Gobierno de España se convirtió en objetivo de las iras de sectores empeñados en imputarle las más graves responsabilidades.

La tensión política alcanzó niveles con pocos precedentes en la historia democrática. La crisis de Irak ya había suscitado intensos debates parlamentarios. En contra de otro de los mitos de aquellos años, el Gobierno hizo una intensísima labor de explicación y comunicación. Entre el 5 de febrero y el 18 de marzo, se celebraron cuatro debates parlamentarios sobre Irak en el Congreso de los Diputados. Todos fueron a petición del propio Gobierno. En todos comparecí yo mismo para explicar la posición de España y debatir con los distintos Grupos Parlamentarios la evolución de la crisis y las decisiones que íbamos adoptando.

Aquellos debates dejaron muy claro el sesgo ideológico y partidista con el que algunos grupos afrontaban la cuestión de Irak. Los socialistas vieron en la crisis de Irak una gran oportunidad política para asomar la cabeza, y no estaban dispuestos a desaprovecharla.

Nunca llegaron a esbozar un discurso coherente sobre la seguridad internacional. Se lanzaron gustosos a la vieja demagogia sentimental y pacifista; a una retórica hueca tejida sobre banalidades y falacias. Y, de ahí, a la negación total de cualquier compromiso con la realidad. Así, en un alarde de sinceridad que los historiadores han de agradecer, Zapatero llegó a reconocer que la cuestión no era tanto lo que dijeran las resoluciones del Consejo de Seguridad —ni la famosa Resolución 1441 ni ninguna otra que se pudiera aprobar en el futuro— como la oposición frontal del PSOE al Gobierno.

A partir de ese reconocimiento se sucedieron todo tipo de disparates. Desde la afirmación paladina de que el objetivo de la política exterior de España debía ser aislar a Estados Unidos, hasta la pretensión de convertirnos en principales avalistas del régimen de Sadam, negando la posibilidad de su sustitución. La radicalización de las posiciones socialistas era evidente. Nada de lo que decían reflejaba una sincera preocupación jurídica o una postura meditada en relación con las exigencias y límites de la seguridad internacional. Irak fue para el PSOE un arma contra el Gobierno del PP. Nada más. Y nada menos.

Las operaciones militares concluyeron con la toma de Bagdad en el tiempo previsto. Su final supuso un alivio. España se había comprometido a estar presente en la tarea de estabilización del país, y pronto las Naciones Unidas establecieron el marco jurídico para la realización de nuestros compromisos.

Como suele ocurrir, el éxito atrajo apoyos tardíos y también provocó alguna inquietud en quienes habían apostado por la confrontación dentro de la comunidad atlántica, lo que los había hecho renunciar a la posibilidad de influir en el desarrollo de los acontecimientos. Algunos de estos últimos veían la posición de España no sin cierta envidia.

No habíamos comprometido a nuestras Fuerzas Armadas en la intervención, pero habíamos logrado alcanzar una gran relevancia e influencia internacional gracias a nuestra posición de sólido apoyo y solidaridad. Habíamos participado —y estábamos participando— en la construcción de una nueva arquitectura internacional. Una arquitectura internacional en la que España adquiriría un peso y una influencia que futuros Gobiernos podrían administrar en beneficio de nuestro país. Era una mirada nueva sobre el mundo y sobre el papel de España en ese mundo. Una mirada nueva que exigía tiempo y, sobre todo, continuidad para consolidarse.

Viajé a Washington para reunirme con el presidente Bush. Quería sellar una nueva etapa de cooperación en la lucha contra el terrorismo y ampliar nuestra relación bilateral a nuevos terrenos.

Aquel viaje puso de manifiesto el grado de sintonía y profundidad alcanzado por nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Ello a su vez fortaleció extraordinariamente la posición de España en Europa e Iberoamérica, y, aún más relevante, nuestra propia posición interna. Estados Unidos aceptó incluir a las marcas políticas de ETA y a varios de sus dirigentes en la lista de organizaciones terroristas. Fue un paso muy importante que facilitó enormemente la persecución de las actividades internacionales de ETA y coincidió con las primeras elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra sin una candidatura proetarra.

En ese viaje también pude comprobar que dentro de la propia Administración norteamericana existían opiniones encontradas respecto de cuáles debían ser los objetivos de Estados Unidos tras el derrocamiento de Sadam Hussein. Lo cierto fue que Washington tardó mucho tiempo —en mi opinión, demasiado— en aclarar el nivel de su compromiso militar con

el futuro de Irak, con su estabilización y con las políticas de recuperación e institucionalización del país.

En este punto, Donald Rumsfeld apareció injustamente como responsable. No lo conocí personalmente hasta la cena de despedida que Bush me ofreció en la Casa Blanca. Él, según dijo, tenía mucho interés en conocer al único dirigente político extranjero que le había mandado callar. Se refería a unas declaraciones mías en el *Wall Street Journal* en las que había aludido a la necesidad de rebajar el nivel de confusión en los medios y de mantener una actitud más calmada. Rumsfeld era un buen conocedor de Europa —había sido embajador ante la OTAN en Bruselas— y de España. Había estado en la delegación del presidente Ford cuando éste visitó nuestro país en 1975, y era un apasionado de los encierros de San Fermín, en los que había participado. Mantuve una buena relación con él después de dejar el Gobierno, y lo visité en su oficina. Rumsfeld suele trabajar de pie, porque padece un problema de espalda. Fue muy amable, me regaló una impresionante fotografía nocturna de las dos Coreas, tomada por un satélite, que conservo en mi despacho. Me pareció que se encontraba algo solo. En su país se le hizo responsable de demasiadas cosas, y en Europa algunos no le perdonaron que hablara de «la vieja Europa frente a la nueva Europa».

En España, la radicalización y desesperación de la izquierda anticipaban algunas actitudes y comportamientos que tiempo después marcarían el rumbo político de nuestro país.

El 16 de mayo, un grupo terrorista vinculado al radicalismo islamista cometía un brutal atentado en la Casa de España de Casablanca. Veintitrés personas morían asesinadas. Estábamos en plena campaña electoral. El candidato socialista creyó encontrar una nueva oportunidad para desgastar al Gobierno del PP y llegó a hacernos responsables de la masacre

por nuestra posición favorable a la intervención militar en Irak. Aquellas declaraciones superaban todas las reglas tácitas de la disputa partidista en una democracia moderna y civilizada. La izquierda iba a por todas, sin reparar en ningún límite político o moral.

Victoria en las urnas

La estrategia de acoso al Gobierno del PP encabezada por el PSOE —y apoyada por el resto de la izquierda y sectores del nacionalismo— tenía como primer gran objetivo ganar las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2003. Esas elecciones iban a ser el primer gran test del impacto de Irak en la política doméstica española. El resultado de esas elecciones nos iba a decir hasta qué punto era real y profunda la oposición de los españoles. Y hasta qué punto esa oposición se traducía en una voluntad de cambio.

Yo era muy consciente de que no estábamos ante una campaña cualquiera. Sabía lo que estaba en juego. La izquierda quería convertir las elecciones autonómicas y municipales en un plebiscito contra el Gobierno de Aznar, en el punto de inflexión que quebrase la trayectoria ascendente del PP y pudiese fin a nuestro proyecto político de cambio para España. Si siempre he tenido un sentido acusado de mi propia responsabilidad, en esta ocasión lo tenía aún más. Hasta el punto de que llegué a plantearme una posibilidad que nunca antes había valorado: si las elecciones salían muy mal y la estabilidad del partido se veía seriamente comprometida, revisaría mi decisión de no repetir como candidato en las siguientes elecciones generales. Afortunadamente, no lo tuve que hacer.

Aquella campaña, sin lugar a dudas, fue la más intensa que he vivido y disputado nunca. Decidí implicarme a fondo,

a tope y sin reservas. Era fundamental estar con el partido, con sus dirigentes y sus militantes, con toda esa buena gente que lo había pasado mal, a quienes la izquierda había acosado, presionado y demonizado durante meses. El Partido Popular había respondido de forma admirable a las campañas de insultos y agresiones, y yo quería retribuirle con todo mi esfuerzo y todo mi empeño.

En el momento de elaboración de las listas, Antonio Basagoiti, que entonces se presentaba a la alcaldía de Bilbao, llamó a Javier Zarzalejos para preguntarle si yo aceptaría cerrar su candidatura. Javier me transmitió el deseo de Antonio y acepté sin dudar.

La campaña fue físicamente agotadora, con dos grandes mítines diarios y muchos kilómetros de viaje. Y, sin embargo, fue la más gratificante de toda mi vida política. Muchos de aquellos mítines, sin guiones previos ni intervenciones preparadas, se convertían en diálogos espontáneos con la gente. El contacto con la militancia y la cohesión del partido me reafirmaban en la impresión de que las elecciones no estaban perdidas ni muchísimo menos. El Gobierno había sufrido un evidente desgaste, pero no había perdido la iniciativa. Y, en cambio, la radicalización del PSOE amenazaba con desbordarse.

Pasé la jornada electoral en la Moncloa. No recibí apenas datos ni previsiones de resultados en todo el día. En mi entorno había incertidumbre y preocupación. Pero, al final, ocurrió lo que mi intuición y la experiencia de la campaña me habían dicho que sucedería: ganamos.

En la sede del partido en la calle Génova resumí los datos. Habíamos ganado en 35 de las 52 capitales de provincia. Habíamos ganado en 9 de las 13 comunidades que celebraban elecciones autonómicas. Teníamos más alcaldes y concejales que ningún otro partido. Y, sobre todo, habíamos demostra-

do que el Partido Popular —al que algunos creían, si no desahuciado, sí muy debilitado— seguía siendo el partido mejor valorado y más apoyado por los españoles. También di las gracias a todos mis colaboradores y al conjunto del partido por el impresionante esfuerzo realizado y por el ejemplo que cada uno de ellos había dado de civismo, fortaleza y entrega al gran proyecto del PP para España. Fue una noche de alegría y muchas emociones.

Aquella contienda electoral ofreció varias lecciones relevantes. Demostró que no hay mejor estrategia electoral que la defensa firme de las convicciones y del proyecto. Y demostró, también, que agitar las llamas del radicalismo es muy peligroso porque siempre beneficia a los más extremistas. A partir de esas elecciones, el PSOE de Zapatero se vería arrastrado por la izquierda más radical y por los nacionalistas hacia posiciones cada vez más escoradas y perjudiciales para España. En lo que a mí respecta, el camino parecía despejado para completar con cierta tranquilidad mi segunda y última legislatura como presidente del Gobierno de España. Esa tranquilidad, sin embargo, duraría muy poco.